

## Elección presidencial

### 1994; ¿un nuevo 1988?

JOSÉ ANTONIO CRESPO

#### **La lección de 1988**

Cuando en 1988 la explosión electoral en contra del Partido Revolucionario Institucional (PRI) sorprendió a la mayoría de los observadores, incluida la oposición misma, pudo comprenderse que ese acontecimiento era la catarsis de todo lo que había ocurrido durante el sexenio de Miguel de la Madrid, tanto en el ámbito económico como en el político. Surgió entonces la hipótesis, bastante plausible por cierto, de que no sólo la crisis económica había sido la responsable de ese acontecimiento, por mucho peso que esa variable tuviese. También hubo factores de tipo político, básicamente derivados de la falta de democracia al interior del partido oficial y de la cerrazón electoral frente a la oposición. Lo mismo en 1985 que en 1986, el régimen tuvo la oportunidad de abrir una importante válvula de escape a las tensiones ciudadanas, derivadas de la crisis económica, sin que ello le representara un gran riesgo. Pero no lo hizo.

Muchos analistas escribieron en ese entonces que era conveniente para el propio régimen desahogar las tensiones a través de las elecciones intermedias y, sobre todo, de los comicios regionales. Chihuahua y Durango representaron el mayor desafío en ese nivel, y también la mejor oportunidad para empezar un proceso de apertura, cauteloso, pero eficaz. Pero la respuesta oficial fue la cerrazón. El gobierno pensó que la línea "dura" sería menos costosa que la "blanda", lo cual es hasta cierto punto paradójico, pues el aperturismo -o liberalización- practicado por el régimen desde su fundación le ha reportado más ventajas que problemas. Incluso, en esa política radica buena parte de la explicación de su larga estabilidad y continuidad. Si en otras ocasiones le ha dado tan buenos resultados esa estrategia ¿por qué no la puso en práctica una vez más, aunque adaptada a las circunstancias? Básicamente porque el gobierno calculó que la irritación era tan grande, que abrir las válvulas electorales en los estados se expresaría en la famosa "teoría del dominó" -que a estas alturas ya debería quedar completamente descartada-. Según esa idea, cuando cayera el primer estado de la república -la primera ficha- en manos de la oposición, los demás le seguirían uno a uno hasta alcanzar el corazón del régimen: el gobierno

federal.

Dicha tesis oficialista refleja sobre todo la enorme desconfianza que el PRI tiene en sí mismo para contender sobre bases equitativas con otros partidos, sobre todo cuando el país se encuentra en medio de una crisis económica. Sin embargo, es más probable que haber abierto dicha válvula de escape, por ejemplo en Chihuahua en 1986, hubiera aligerado la carga de tensión e irritación ciudadana que, al no encontrar desahogo, se acumuló para estallar en los comicios presidenciales de 1988. Y dado que los comicios presidenciales apuntan al centro del régimen político, cualquier desafío que se origine en torno a ellos resulta mucho más riesgoso y costoso que los problemas regionales. La crisis económica y el descontento derivado de ella, se conjuntaron con la cerrazón político-electoral practicada sobre todo a partir de la segunda mitad del sexenio -tras haber ensayado una breve pero no despreciable apertura en su primera mitad.

En la explicación de la crisis electoral de 1988 también cuenta la antidemocracia prevaleciente al interior del partido oficial. Los sectores inconformes dentro del PRI, que se sintieron desplazados política e ideológicamente, desafiaron la tradicional disciplina del partido rebelándose abiertamente contra su dirigencia, cosa que no había ocurrido con tanto dramatismo desde la escisión henriquista en 1952. El manejo que la cúpula partidista dio a la Corriente Democrática, como se denominó el grupo disidente, respondió a antiguos esquemas que dejaron de ser eficaces. Pero cuando el gobierno se percató de ello, ya era demasiado tarde. No parece creíble la hipótesis, barajada en ese entonces, de que la escisión de la Corriente Democrática y la candidatura independiente de su líder, Cuauhtémoc Cárdenas, se había originado según un plan concebido por el PRI y el gobierno para contrarrestar el desafiante ascenso del Partido Acción Nacional (PAN).

En realidad, todo parece indicar que dichos eventos tomaron por sorpresa a la dirigencia priísta y a la cúpula gubernamental, que decidieron entonces no darle demasiada importancia al movimiento cardenista, sin partido, infraestructura **política** o arraigo ciudadano. Nuevo error. La historia indica que son precisamente las escisiones del partido oficial las que mayor desafío le representan al régimen, precisamente por surgir de su seno. Las fisuras priístas le disputan al partido oficial sus símbolos, banderas, discurso, cuadros, líderes, algunas corporaciones, y muchos electores. Y en las condiciones de malestar -dentro y fuera del PRI- que caracterizaron el final del sexenio delamadridista, el reto tendría que ser mucho mayor.

Así, el cable económico y el cable político se juntaron en 1988 para hacer estallar lo que ha sido el mayor desafío electoral que el régimen priísta haya experimentado, y que

sólo con dificultad pudo superar. En efecto, el gobierno no pudo evitar el vendaval en 1988, y sólo le quedó hacer grandes malabares para salir del paso. Puede decirse que la experiencia de 1988 arrojó la conclusión de que la apertura política durante el sexenio hubiese relajado la situación al finalizar el periodo. Haber cerrado las válvulas de escape electorales en la segunda mitad del gobierno delamadridista, lejos de aligerar la tensión, la incrementó y la transfirió acumulada a los comicios presidenciales. El año de 1988 representó una dura prueba para el régimen; al menos era de esperar que tan amarga experiencia hubiera sido bien asimilada por el gobierno, precisamente para evitar que algo parecido se repitiera. Sin embargo, ahora que se aproxima el final del gobierno de Carlos Salinas, y que se divisan en el futuro inmediato nuevos comicios presidenciales, no parece claro que la lección de 1988 haya sido aprendida.

### **La receta salmista**

Para evitar una nueva explosión electoral, el gobierno de Salinas se concentró en las variables económicas y sociales del fenómeno, y soslayó, aunque no por completo, la políticas electorales. Bajo esa premisa se abría la posibilidad de preservar al régimen político todavía en su esencia hegemónica, sin grandes transformaciones. Se lograron manejar los indicadores macroeconómicos, y restablecer un programa de promoción social para los sectores rezagados social-mente, asunto que el gobierno de De la Madrid descuidó casi completamente, confiado en que el mercado realizaría dicha tarea. Desde luego, el gobierno de Salinas no descuidó del todo las causales políticas del descontento, y tomó la inteligente decisión de reconocer el triunfo del PAN en Baja California, a mediados de 1989.

También tomó la precaución de alejar al PAN de la nueva formación neocardenista, el Partido de la Revolución Democrática (PRD). Y por supuesto, manejó la efectiva carta de una nueva legislación electoral, que lograrse generar una vez más el espejismo de que nos acercamos constantemente al umbral democrático. Pero la nueva normatividad electoral dejó intactos los controles reales del gobierno sobre los comicios. En otras palabras, lo que el gobierno de Salinas hizo en materia política fue actualizar la vieja estrategia de "liberalizar" al régimen -conceder algunos espacios sin tocar la condición hegemónica del partido oficial- en lugar de democratizarlo de manera auténtica. Las condiciones políticas exigían que el sacrificio fuera mayor. Si algo había reflejado lo ocurrido en 1988, es que no bastaba con "soltar" municipios, había que entrar de lleno en el nivel de las gubernaturas para que la nueva fase de liberalización resultara conveniente. Desde

luego, en tanto se trataba de actualizar la liberalización en lugar de aceptar y conducir una auténtica democratización, el reconocimiento de los triunfos opositores en las gubernaturas se haría desde arriba, y a partir de los cálculos de la Presidencia, por encima de los reclamos reales y expectativas tanto de priístas como de opositores.

### **Los límites del salinismo**

En la medida en que funcionara la estrategia de recuperación económica, la de renovación de la promoción social y la puesta al día de la liberalización política, las cosas podrían caminar satisfactoriamente para la "restauración" de la hegemonía priísta. En realidad, algunas elecciones locales, pero sobre todo los comicios legislativos de 1991, apuntaron en ese sentido. Sin embargo, en el mismo año de 1991 el descontento volvió a asomar su cara, y no precisamente por razones de tipo económico, o al menos no sólo por ellas. Los abusos y arbitrariedades acumuladas de los gobernadores de extracción priísta en varias entidades, así como la política de impunidad, todavía prevaleciente, llegaron a colmar la paciencia de sus respectivas ciudadanías.

¿Cómo leer tales movilizaciones cívicas, como las de San Luis Potosí, Guanajuato, Tabasco, Michoacán, Tamaulipas, Sinaloa y Puebla? Independientemente de quién haya ganado en realidad esos comicios, tema que se presta más a la adivinanza o a las preferencias personales que a la certidumbre, lo que puede extraerse de tales conflictos es que no bastó la recuperación económica de los primeros años para que diversos sectores ciudadanos volvieran a aceptar sin más la hegemonía del PRI. Y también, que las válvulas de escape abiertas por el gobierno salinista -Baja California, a medias Guanajuato, después Chihuahua, y quizás todavía otra más adelante, además de las alcaldías reconocidas a la oposición- no parecen ser suficientes dado el nivel de inquietud ciudadana en diversos puntos del país.

Es decir, probablemente las condiciones no son propicias para la restauración del régimen hegemónico. La liberalización puesta en marcha por este gobierno no ha sido ya del todo eficaz. Lo que hasta ahora ha sido una fructífera estrategia -ceder lo periférico para conservar lo central- parece estar alcanzando sus límites. La credibilidad, la legitimidad, la gobernabilidad y, en última instancia, la estabilidad política, no parecen ya poder preservarse a través de la tradicional liberalización política, aunque haya sido actualizada en una medida no pequeña. Seguramente la liberalización, para poder dar un nuevo aliento al régimen priísta, tendría que llevarse a un nivel más elevado, que por lo mismo raya con una auténtica democratización política, y por eso no ha sido aplicada por el gobierno. Esta fase

"actualizada" de la liberalización consistiría en hacer menos selectivo el reconocimiento de los triunfos opositores, incluir a todos los partidos en esa estrategia, y avanzar claramente en una legislación electoral más equitativa.

Ello hubiese representado mayores pérdidas de las que el PRI de todas formas registró, pero con gran probabilidad se hubieran mantenido en niveles aceptables. La mayoría de las plazas políticas seguirían estando seguramente en manos priístas. En cambio, con esa estrategia se abrirían suficientes válvulas de desahogo de la tensión ciudadana, que llevasen a un panorama sucesorio en 1994 mucho más calmado y controlable de lo que ahora se vislumbra. Dichas válvulas no sólo hubieran actuado para relajar el ánimo ciudadano en las entidades conflictivas, sino que servirían como dispositivos de seguridad para el malestar económico que, seguramente, crecerá conforme se aproxime el final de sexenio. En efecto, en los últimos gobiernos se ha podido registrar un ciclo sexenal que termina con un descenso notable en la popularidad presidencial, la credibilidad política y la confianza económica. Ciertamente se tomaron algunas medidas para prevenir ese descenso, pero se hizo con un exceso de confianza por parte del gobierno. Los éxitos logrados durante los primeros años del sexenio, en lugar de ser encauzados para avanzar significativamente la reforma política, la inhibieron. Si ahora los logros económicos vuelven a verse limitados al cerrar el sexenio, la confusión, decepción e irritación resultantes no se verían compensadas por avances políticos significativos. En cambio, se conjugarán con la confusión, decepción e irritación derivadas de los conflictos postelectorales en todo el país. De nuevo, los cables económico y político podrían entrar en contacto, haciendo estallar un nuevo detonador electoral en 1994. Si el régimen resistió el estallido de 1988, no es seguro que pueda volver a hacerlo en una segunda ocasión.

### **Hacia 1994**

Además de los recurrentes conflictos electorales, otros signos de la descomposición política están a la vista. La frecuente rebeldía interna de las bases del PRI, la "rectificación" presidencial frente a su partido en Los Pinos, poco antes de rendir el Cuarto Informe de Gobierno, la escisión de los diputados del PAN, la desesperación y división interna del PRD, la precipitación oficial en conseguir nuevos montos de legitimidad a través de nuevas -y muy costosas- credenciales de elector y otra reforma electoral, el cambio de gobierno en Estados Unidos, los brotes de violencia postelectoral en Tamaulipas, Sinaloa y Michoacán, no son sino meros heraldos de problemas y

dificultades que podrían congregarse en los comicios de 1994. Ello para no hablar de las posibles fisuras que dentro del PRI se generen en el momento de la nominación de candidato presidencial en ese partido. Rota la disciplina básica del PRI, hace seis años, nuevos desprendimientos son probables ante la falta de conformidad sobre los procesos de selección interna de candidatos. Las fuertes insurrecciones priistas que el tema motivó a nivel municipal y estatal, quizás son un pequeño adelanto de lo que podría ocurrir en la nominación de candidato presidencial.

Es cierto que se ha observado una modificación de las instituciones políticas, misma que ofreció Salinas de Gortari al ascender a la Presidencia, pero no de la mejor manera para conducir pacíficamente el cambio. Más bien han sido golpeadas y desprestigiadas al grado en que se percibe un fuerte vacío institucional al encarar los comicios presidenciales. El tiempo para corregir los errores cometidos no es mucho. Probablemente ya no se pueda configurar un panorama adecuado para los comicios de 1994, que se perfilan como cruciales en la evolución política del país. Todos los partidos han sido golpeados y por una u otra razón, desprestigiados. De todas maneras, la ciudadanía volverá a elegir el terreno electoral para expresar sus frustraciones, decepciones, esperanzas o agradecimientos hacia el régimen. Pero ni las autoridades, ni los funcionarios, ni los procesos, ni las normas electorales gozarán en 1994 de la credibilidad necesaria para cumplir con su función básica: dirimir la lucha por el poder de manera pacífica e institucional.

Quizás la única salida que tenga el gobierno para destrabar el complicado escenario político -así sea de manera provisional- consista en abrir nuevas válvulas de escape en lo que resta del sexenio, reconociendo los triunfos opositores ahí donde ocurran, y demostrando fehacientemente -si es que eso es todavía posible- las legítimas victorias del PRI. Ello podría desahogar en parte la creciente irritación ciudadana y tensión política. Los conflictos postelectorales que nos abruma, aunque hayan desembocado en alguna "solución" improvisada y artificial, no han extinguido el malestar. La resurrección del conflicto en San Luis Potosí, cuando el gobernador interino Gonzalo Martínez Corbalá pretendió postularse como candidato para la gubernatura titular, demostró que la problemática está latente, como carbones semiapagados, y que basta cualquier nueva afrenta para volverlos a encender.

La secuencia de pugnas postelectorales -con o sin "solución"- constituye una especie de mecha política que lleva a un detonador mayor, ubicado en 1994. La única forma posible para cortar esa trayectoria es ampliar la liberalización practicada hasta ahora, a

todos los partidos y todos los comicios que restan en el calendario electoral. Las pérdidas que sufra el PRI a consecuencia de ello serán, sin duda alguna, menores que el daño que podría sufrir todo el régimen en 1994. Por esa vía se podría establecer un puente que permita al régimen salvaguardar la institucionalidad política, para emprender en serio una verdadera democratización el siguiente sexenio. Si en cambio el gobierno se cierra al final del ciclo sexenal para posponer la reforma hasta el siguiente, como de hecho está ocurriendo, quizás no pueda ya superar la sucesión presidencial en la arena electoral. La tensión ciudadana, en lugar de desahogarse en los comicios regionales, se concentrará, una vez más, en los presidenciales. Sería conveniente para el gobierno y el país que una de las más importantes lecciones de 1988 -cerrar los comicios en los estados hacia el final del sexenio congestionado, en lugar de aliviar la tensión- no sea guardada por el gobierno en el cajón de los trastos inservibles.